

## ECONOMÍA Y TRABAJO

# Bruselas pide medidas que aseguren la sostenibilidad de las pensiones

La Comisión advierte de la desigualdad y el "uso generalizado" de contratos temporales

LLUÍS PELLICER. Bruselas no solo reprimió ayer de nuevo a España por su elevada deuda pública. También le advirtió de que la marcha atrás en la reforma de las pensiones sin adoptar antes

medidas para compensar su impacto presupuestario supone "elevados riesgos" para la "sostenibilidad financiera" a medio y largo de la Seguridad Social. La Comisión Europea, que estima que el aumento del gasto en pen-

siones llegará a ser del 4,7% del PIB en 2050, lamentó que la medida abra la brecha de la desigualdad intergeneracional. Bruselas también urgió a corregir el abuso de los contratos temporales y la desigualdad de rentas.

La Comisión desgranó ayer, país por país, la situación macroeconómica, financiera, laboral y social de la Unión Europea. Se trata de una suerte de examen cuya eficacia los países ponen en entredicho —la prueba es que Alemania y Holanda siguen acumulando grandes colchones fiscales— pero que sirve para sacar los colores a más de uno.

El informe sobre España admite el sólido crecimiento experimentado entre 2013 y 2019. La economía se expandió en ese periodo un 16,5%, con un persistente superávit por cuenta corriente, y el empleo lo hizo un 14%, por encima de la zona euro. Sin embargo, avisa de que España también arrastra "debilidades estructurales" y un legado de la crisis del cual no logra zafarse por completo. En plata: una ingente deuda pública, un mercado laboral precario y una elevada desigualdad de rentas.

La Comisión volvió a mostrar su preocupación por el déficit "tozudamente alto" de las cuentas públicas y, en especial, por la deuda, del 95,5% del PIB, según el Banco de España. Bruselas no percibe riesgos a corto plazo, pero sí a la larga. En el informe, de un centenar de páginas, avisa en varias ocasiones a España sobre el peligro de haber vuelto a vincular las pensiones con el IPC y haber apartado la aplicación del factor de sostenibilidad, que tenía en cuenta también la esperanza de vida en el cálculo de la pensión inicial de un jubilado.

Esas dos decisiones las adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy para lograr los apoyos para aprobar los Presupuestos de 2018. Y el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a ligar infla-



Desde la izquierda, el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, y el comisario de Empleo, Nicholas Schmit, ayer en Bruselas. / OLIVIER HOSLET (EFE)

ción y pensiones de forma permanente. Esta permanencia, considera el informe, "beneficia a los pensionistas de hoy a expensas de generaciones futuras". "A menos", añade, "que se implementen medidas compensatorias". Dado el envejecimiento de la población, la Comisión estima que volver a vincular pensiones e inflación incrementará el gasto en un 4% del PIB, mientras que eliminar el factor de sostenibilidad lo hará un 0,7% a largo plazo.

Bruselas no solo ve ahí un problema para generaciones venideras, sino también para las actuales. Ese aumento de gasto,

## Flexibilidad con los afectados por el coronavirus

La Comisión Europea abrió ayer la puerta a que los países más afectados por el coronavirus, como Italia, puedan beneficiarse de un margen de flexibilidad en la aplicación de las reglas fiscales comunitarias. "En nuestro Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hay previstas cláusulas de flexibilidad sobre circunstancias excepcionales", aseguró el comisario de Eco-

nomía, Paolo Gentiloni. En todo caso, las conversaciones con los socios interesados se producirán en las próximas semanas, cuando tengan más clara la magnitud del brote.

Gentiloni consideró que parte de los riesgos a la baja para el crecimiento de los que advertía hace un par de semanas ya se han materializado. Aun así, dijo que es pronto para cuantificarlos. El comisario sí afirmó haber visto preocupación entre los asistentes a la última reunión del G20 en Arabia Saudí, en especial entre los líderes de países asiáticos.

a su juicio, "empeora la igualdad intergeneracional" porque "la pobreza afecta principalmente a grupos de edad joven, incluyendo niños".

Bruselas recuerda que España es el socio de la UE que menos ayudas da a familias. Y señala todas las asignaturas pendientes del país con sus jóvenes: el riesgo de exclusión social, sobre todo entre la población infantil; la integración al mercado laboral; procurar una salida a la todavía gran proporción de *ninis*—el 12,4%, una de las mayores de la UE—; el temprano abandono escolar; el riesgo de exclusión social o el complejo acceso a la vivienda en grandes ciudades.

El Ejecutivo de Ursula von der Leyen no entra a decir cuáles deben ser las medidas compensatorias, aunque una de las alternativas que se han barajado pasa por recaudar más mediante impuestos. Y ahí el informe recuerda que España todavía tiene margen. El documento señala que los ingresos tributarios de España en 2018 suponían el 34,7% del PIB, por debajo del 39,2% de la UE y el 40,6% de la zona euro. La Comisión ahí marca el camino: hay espacio en los gravámenes al consumo, al medio ambiente y a la propiedad.

## Contrarreforma laboral

El informe que publicó la Comisión ahonda también en el mercado laboral. Bruselas admite que el crecimiento económico ha permitido que el empleo vaya bajando, pero este sigue siendo "todavía muy elevado", sobre todo entre jóvenes y trabajadores no cualificados. "El uso generalizado de los contratos temporales pesa sobre el crecimiento de la productividad y alimenta la desigualdad y la pobreza en el trabajo", señala el informe, que recuerda que España aún sufre una de las mayores desigualdades de rentas de Europa.

La Comisión ya había advertido sobre una contrarreforma laboral, pero de forma tímida. En esta ocasión, destaca el "papel importante" de las reformas de 2012 y 2013, que a su juicio "apuntalaron" la recuperación del mercado laboral. Por ello, fuentes comunitarias advirtieron al Gobierno de que antes de derogar aspectos de la reforma laboral, se aseguren de proteger su capacidad de crear empleo.

## Ocho provincias recibirán fondos para la reconversión climática

La propuesta europea otorga a España 307 millones, el 4% del total

LL. P. Bruselas propone que ocho provincias españolas reciban recursos del fondo para la reconversión industrial y energética de regiones europeas, en especial mineras, para lograr los objetivos climáticos fijados por la UE. La Comisión Europea postula A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Almería, Córdoba y Cádiz, que podrán repartirse los 307 millones de euros previstos para España. El documento, se-

gún el Ejecutivo comunitario, es un "punto de partida" para negociar. España ya trasladó a Bruselas que consideraba que esa cantidad, que supone el 4% de todo el fondo, era insuficiente.

El llamado Fondo de Transición Justa (FTJ) está dentro del Presupuesto de la UE que los Veintisiete no fueron capaces de acordar la semana pasada. Sin embargo, el departamento de Cohesión y Reformas, que dirige la portuguesa Elisa Ferreira, ha

presentado ya el centenar de regiones europeas —alrededor del 10% del total— que podrán beneficiarse de esos recursos.

La propuesta de la Comisión no es definitiva y admite ajustes, aunque Bruselas ha ido hablando en los dos últimos meses con los países de la UE. Por ello, ha decidido que el mes que viene se abra el periodo en el que los Estados podrán empezar a definir los proyectos de cada área designada con la asistencia técnica

de la Comisión y junto a cada una de las regiones.

"Estamos preocupados porque creemos que no debería haber retraso y esperamos que se progrese rápido en relación con las cantidades [que negocian los países]. Dicho esto, tenemos que empezar a movernos y a preparar cosas. Y creemos que se puede hacer mucho, aunque aún no se haya llegado al final de la negociación del Marco Financiero Plurianual", sostiene Ferreira en un encuentro con varios diarios, entre ellos EL PAÍS.

El documento aprobado ayer por la Comisión recuerda que desde 2008 el sector minero perdió más de 8.000 empleos en España. A finales de 2018, España tenía 14 centrales de carbón con 3.300 empleados que generaban otros 10.000 puestos indirectos.

Ferreira admite que muchas regiones hicieron esfuerzos en el pasado sin recibir ayudas, pero recuerda que ese no es el principal cometido del fondo. "Nuestro foco está ahora en la hiperconcentración de algunas áreas. Y debemos ayudarlas a hacer la transición", apunta.

Las vicepresidentas del Gobierno Nadia Calviño y Teresa Ribera y la ministra de Exteriores Arancha González Laya protestaron en su momento por la escasa cuantía asignada a España. Ferreira recuerda que los 7.500 millones de euros del fondo —aunque la UE quiere movilizar hasta 100.000 millones— son superiores a los 5.000 que pedía el Parlamento Europeo. "Tenemos que hacer lo mejor que podamos con el dinero que tenemos", afirma.